

En el Oeste de Caracas SE PREPARA UN GRAN DESALOJO

Lucy Gómez

Enmascarada de diversas formas, la lucha por las tierras en Caracas ha hecho del oeste un campo de batalla. Ya se hable de la expropiación por razones de utilidad pública al final de la Cota Mil, en la carretera vieja Caracas-La Guaira, en la autopista al litoral por la ampliación de las vías, o de los cambios de zonificación y los desalojos en la parroquia, en el fondo el tema es el mismo: la necesidad que tiene el Estado de descongestionar vialmente a la ciudad y de incorporar los terrenos que la rodean y otros que hasta ahora han sido ocupados por población pobre a la oferta del mercado de viviendas.

Este asunto que así se ve aparentemente tan sencillo —el desarrollo de zonas deprimidas de la ciudad— se complica cuando ese desarrollo se planea sólo para mejorar la calidad de vida de las clases medias y altas y no para los pobladores de esos sitios, clases medias bajas, obreros y marginales.

Las decisiones que se toman este año para sacar de sus casas a los catienses de las partes cercanas al Avila, desde La Pastora hasta la carretera vieja Caracas-La Guaira, pasando por los Frailes y Altavista, por ejemplo, producen un verdadero terremoto social.

El trazado de la Cota Mil por Lídice hasta la carretera Caracas-La Guaira costará novecientos setenta millones de bolívares. Según las cuentas del MTC, solamente habrá setecientas u ochocientas afectaciones.

Los afectados no están tan seguros. Las asociaciones de vecinos de Lídice y La Pastora, que tienen la experiencia de la batalla que tuvieron que librar en 1981 y 1982 para que el trazado de la Boyacá no afectara lo que después se llamó el polígono histórico de La Pastora —un bello y antiguo casco tradicional y grato— reaccionaron con homogeneidad, aunque tal vez con retardo. Estaban confiados en los acuerdos que se tomaron entonces en un acta del primero de febrero del 82 con el MTC, donde la primera resolución era que la obra de la Cota Mil se suspendería hasta cuando los afectados no se reubicaran en casas, de acuerdo al canon de propiedad por propiedad.

Estaban desorientados, porque los organismos oficiales marcan casas, sin



dar información. Muchas de las casas pintadas, según el asesor del MTC Enrique Samaniego, quien maneja el trazado y las decisiones sobre desalojo, no necesariamente serían afectadas. La confusión trae inseguridad a todos.

Las asociaciones de vecinos de Los Frailes, Ruperto Lugo y Altavista están en otra posición. Primero, sus casas, en la mayoría ranchos, están en el filo de la montaña en zonas muy desgastadas y catalogadas como zona de derrumbe. De esos cerros, especialmente los de San Isidro y Macayápa, se ha hecho un uso intensivo y perjudicial, porque no hay canalización de aguas negras, ni tuberías. Las aguas negras que caen en la montaña, la han filtrado. Eso, sumado a las lluvias y a la inestabilidad del terreno, derrumbaron en diciembre pasado muchos ranchos en esos dos barrios. La demarcación de esas casas la había hecho la Guardia Nacional algunos meses antes. Eso obligaba en cierto modo al Estado a pagar ranchos y a reubicar familias —aunque no hay ofertas ciertas de viviendas en Caracas—.

Luego los ranchos se cayeron, no hubo más obligación. Damnificado es damnificado. En este caso, un paría que tiene que acogerse a lo que disponga Defensa Civil, INAVI y la Gobernación de Caracas.

Las personas que la lluvia ayudó a

desalojar en diciembre pasado del norte de Catia fueron a parar a campamentos improvisados en el litoral y en el Paraíso —Estadio Brígido Iriarte y Almacenadora Vargas— y luego a sitios “de recepción” como Nueva Tacagua. De allí no había donde escoger. Los ofrecimientos fueron para que se marcharan al interior.

Los únicos que resistieron algunos meses en el módulo policial de Los Frailes, —40 familias— fueron sacadas al final después del aislamiento y la presión por parte de los organismos oficiales hacia el interior.

La lluvia alivió los planes de desalojo del MTC, tanto en Los Frailes como en Plan de Toro, la parte de Altavista que asoma sobre la carretera Vieja, un barrio que se deterioró por las ampliaciones de la vía que hizo el mismo MTC años antes, sin construir un muro de contención. Los vecinos tuvieron la suerte de estar organizados y de tener documentos que demostraban el compromiso del ministerio. Sus casas fueron pagadas. No eran ranchos.

CUANDO SE UNEN LA COTA Y LA AUTOPISTA

El problema se torna más grave cuando el desalojo por causa de utilidad pública en la Cota Mil hasta la entrada de la carretera vieja se convierte en una mudanza masiva a lo largo de la salida a La Guaira que puede afectar a cien mil personas.

Resulta que para afectar a los habitantes de más de cuarenta barrios, desde Blandín hasta Ojo de Agua, se unen no sólo la intención de ampliar la carretera vieja, sino el decreto de Parque Nacional El Avila, el que se aprobó a partir de la polémica sobre las “líneas de vida” que alimentan a Caracas de electricidad, agua, y gasolina, y los dictámenes sobre áreas de peligro que existen en Energía y Minas y OMPU.

El “corredor Tacagua”, como se le llama vulgarmente, es una zona imaginaria que corre paralela a la quebrada del mismo nombre. Es por donde entran y salen de la ciudad oleoductos, donde están situadas las plantas de gasolina de MARAVEN y LAGOVEN, “Cantinas” y “Ciudad de Caracas”, pasan líneas de electricidad, y es a la vez la salida de la ciudad al mar. Estratégicamente, un

sector de la mayor importancia.

Los primeros barrios que se formaron allí, desde 1947, fueron Blandín y La Línea, paralelos a los rieles del ferrocarril inglés que dejó de funcionar en el año 52. En esa época no existía el decreto sobre Parque Nacional, que data de 1958.

Pero desde entonces toda la montaña del lado izquierdo saliendo de la ciudad, está poblada de aproximadamente cien mil personas, según las cifras de la Oficina Metropolitana de Planeamiento Urbano. Para los analistas de las fuerzas armadas y para Antonio Cruz Fernández, urbanista y fundador de OMPU, es de vital importancia desalojar a las familias que pueblan esa zona, que además es "zona de derrumbe" en su criterio.

OMPU, que actualmente hace estrategias de crecimiento de esos sectores, piensa como muchos que ven el extraordinario poblamiento que existe allí, que desalojar a veinte mil familias es imposible. No sólo por la magnitud del operativo contra una población que no se dejará sacar fácilmente, que está organizada y alerta, sino porque no hay sitio donde darles vivienda. "Tendríamos que hacer otra ciudad en alguna parte —decía una funcionaria de la oficina de planeamiento—. Es imposible".

Mientras a alto nivel se combina el desalojo de la Cota Mil con el de la carretera vieja en una polémica entre la utopía y la realidad, los piquetes de la Guardia Nacional pasan todos los días por las casas de la carretera vieja intimidando a los pobladores, diciéndoles que se vayan "para donde vinieron", marcando sus casas y provocando muy a menudo enfrentamientos.

LA ACTITUD DE NUEVO HORIZONTE

Menos organizados que los vecinos de La Pastora, los de la carretera vieja están empezando a reunirse y a reaccionar. Reivindican que muchos no son del interior, sino que nacieron y se criaron allí y que nadie tiene derecho a decirles que se vayan al interior.

Tampoco quieren barracas de Nueva Tacagua. Las condiciones de vida de la carretera vieja son muchísimo mejores que las insalubres viviendas de Nueva Tacagua, donde hay baños colectivos, agua cada semana, cuando viene regularmente, y tres médicos para cuarenta mil habitantes.

Además, las casas de La Línea no son ranchos, son de bloques, con piso de cemento, y muchas de dos plantas, aun-



que estén subiendo a mitad de la montaña.

La pauta en la conducta de los vecinos de la carretera vieja respecto al marcaje y la vigilancia de la Guardia Nacional está dada en cierto punto por el proceso de Nuevo Horizonte, un barrio de la zona de Niño Jesús, del otro lado de la autopista.

Allí los desalojos se mencionan por otra cosa. El barrio fue nombrado en una lista de poblados que manejó imprudentemente Defensa Civil, anunciando su desalojo, sin mencionar cuándo, cómo ni dónde ofrecería viviendas, a los que según la institución saldrían en breve.

La junta de vecinos del sector, con una vieja experiencia en la lucha por la tenencia de la tierra, con parceleros, latifundistas y Guardias Nacionales denunciados por tener intereses en los terrenos de la montaña que circunda al barrio, decidieron no dejar marcar las casas, no recurrir a los organismos oficiales en caso de derrumbe y organizar a los vecinos para dar ayuda y vivienda dentro del mismo barrio a las víctimas.

Nuevo Horizonte tiene una vitalidad tremenda. No solamente participan en el problema la asociación de vecinos,

sino grupos misioneros, asociaciones deportivas de todo tipo y maestros.

Su ejemplo, después de varias reuniones y de una coordinadora que funciona en la parte baja de Catia, con los vecinos de Los Flores y Nueva Caracas, fue seguido por Blandín y La Línea, que toman las mismas medidas.

Los vecinos quieren que el Estado se deje de misterios y de noticias a medias, y que sincere la situación, especificando cuáles zonas serán desalojadas, cuándo, cuáles casas serán afectadas, cuánto dinero se dispone para pagarlas y, en caso de reubicación, dónde están las zonas y las viviendas nuevas.

Hablando claro, sincerarse parecería imposible para los organismos públicos. Apenas se dispone de una oferta de 400 apartamentos en Covimetro, para los que salgan de ochocientas viviendas que declara afectadas el MTC por la Cota Mil. De seiscientas viviendas que anunció Defensa Civil que estaban listas en los valles del Tuy, sólo se dispone de 30 por ciento. El resto, según anunció la gobernación de Miranda, son para los pobres mirandinos. En el interior, INAVI no ha llegado a construir ni cinco mil viviendas el año pasado.

Desalojo sin oferta de viviendas convertiría al oeste, si se radicalizan las posiciones en un lugar difícil para vivir con una población radicalizada en contra de la acción irresponsable y superficial, pero represiva de los organismos públicos.

Los pobladores no quieren salir. Tampoco aceptan fácilmente la proposición intermedia de OMPU, el "congelamiento" de servicios que los condenaría a quedarse más años sin escuelas, parques ni servicios básicos.

El Estado no se convence fácilmente de dejar las cosas de este tamaño. La Cota Mil va y la ampliación de Caracas-La Guaira va. Hasta dónde llegue el gran desalojo del oeste, es cosa que durarán el tiempo, el nivel de lucha de sus vecinos y la presión del mercado sobre las tierras de Catia aledañas a la Cota, donde ya se conocen ofertas millonarias, con todo e "inestabilidad geológica".

NOTA

Al cierre de este número, nos enteramos de que a Lucy Gómez le ha sido concedido el Premio Municipal de Periodismo. El equipo de la revista SIC se siente complacido.